

TEMA 59

PROCEDIMIENTO SANCIONADOR EN MATERIA DE TRÁFICO (III). RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA. RECURSOS DE CONTENIDO ECONÓMICO ANTE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRIBUNALES ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS. RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

INDICE

1. RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA:

- RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO:

Concepto.
Regulación.

- OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

Recurso extraordinario de revisión.
Revisión de oficio.
Revocación de actos y rectificación de errores.

- Cuadro general de competencia para resolver en materia de recursos.

2. RECURSOS DE CONTENIDO ECONÓMICO ANTE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRIBUNALES ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS:

- El recurso de reposición (de la gestión de apremio).
- La reclamación económico-administrativa y los Tribunales Económico-administrativos.

3. RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA:

Las partes del proceso:

- Pretensiones de las partes.
- La acumulación.
- La cuantía del recurso.
- Interposición del recurso y reclamación del expediente.
- Plazo de interposición del recurso.
- La demanda.
- La contestación a la demanda.
- Prueba.
- Vista y conclusiones.
- Procedimiento abreviado.
- La sentencia.
- La ejecución de sentencias.

- Devolución de la multa por ejecución de sentencias.

1. RECURSOS EN VÍA ADMINISTRATIVA.

RECURSO DE REPOSICIÓN EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR ORDINARIO.

Concepto.

El recurso administrativo es la actuación que el administrado dirige contra los actos y disposiciones de la Administración respecto de los cuales considere que son contrarias al ordenamiento jurídico o que lesionan sus derechos o intereses o que producen indefensión.

El recurso permite a la Administración revisar su actuación antes de plantear la cuestión ante los órganos jurisdiccionales.

Tras la modificación introducida por la Ley 18/2009 (y así sigue en el TR LSV) desapareció el recurso de alzada en el procedimiento sancionador de tráfico y la acción revisora se realiza por el mismo órgano que dictó el acto, es decir, en nuestro caso por el Jefe Provincial, mediante el recurso potestativo de reposición. Junto al recurso de reposición existen otros medios de impugnación que se verán más adelante.

El recurso deberá presentarse por escrito (actualmente, también por medios telemáticos), no siendo necesaria la utilización de ningún impreso o papel especial ni la intervención de facultativo alguno. En el escrito del recurso deberán indicarse, por regla general, el nombre, apellidos, domicilio a efectos de notificaciones, acto contra el que se recurre y fundamentos en que se apoya, lugar, fecha, firma, centro o dependencia al que se dirige y las demás particularidades que exijan las disposiciones legales, como el D.N.I.

Dicho escrito debe ser presentado ante la administración autora del acto utilizando los diversos medios de presentación señalados en la LSV o en la Ley 39/2015.

Es importante señalar la necesidad de que los recursos que se presenten en los Servicios Centrales, o en cualquier Jefatura de Tráfico distinta a la que tramita el expediente, sean remitidos con la mayor urgencia a la Jefatura de Tráfico instructora del expediente sancionador, que dejará constancia de su presentación y lo remitirá junto con el resto del expediente al departamento correspondiente para su digitalización, de forma que pueda ser conocido desde cualquier terminal sin necesidad de formato papel.

Las resoluciones que pongan fin a la vía administrativa (entre ellas la propia resolución del recurso) son recurribles en vía contencioso-administrativa.

Existen empresas especializadas en la realización de recursos para los denunciados y presentación de alegaciones, unas veces como servicios contratados

como complementarios del seguro del vehículo y otras como servicio contratado de forma independiente. Es importante tener en cuenta que, si dicha empresa interviene directamente, deberá contar con la oportuna representación del denunciado y que, en ocasiones, dan lugar a modificaciones del domicilio a efectos de notificaciones. Téngase en cuenta que la presentación de alegaciones puede perjudicar al denunciado, al impedir beneficiarse del pago reducido.

Regulación.

El recurso de reposición es potestativo. Es decir, puede interponerse recurso de reposición o puede irse directamente a la vía contencioso-administrativa (aunque no de forma simultánea). La resolución expresa o presunta del recurso de reposición abre nuevamente la vía contenciosa.

El recurso de reposición sólo es admisible cuando se trate de procedimientos sancionadores ordinarios, no siendo admisible en procedimientos abreviados ni en procedimientos sumarios de la LSV.

Los recursos en el procedimiento sancionador ordinario se regulan en el art. 96 LSV, que dispone:

. La resolución sancionadora pondrá fin a la vía administrativa y la sanción se podrá ejecutar desde el día siguiente a aquel en que se notifique al interesado, produciendo plenos efectos, o, en su caso, una vez haya transcurrido el plazo indicado en el artículo 95.4.

2. Contra las resoluciones sancionadoras, podrá interponerse recurso de reposición, con carácter potestativo, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación.

El recurso se interpondrá ante el órgano que dictó la resolución sancionadora, que será el competente para resolverlo.

3. La interposición del recurso de reposición no suspenderá la ejecución del acto impugnado ni la de la sanción. En el caso de que el recurrente solicite la suspensión de la ejecución, ésta se entenderá denegada transcurrido el plazo de un mes desde la solicitud sin que se haya resuelto.

4. No se tendrán en cuenta en la resolución del recurso hechos, documentos y alegaciones del recurrente que pudieran haber sido aportados en el procedimiento originario.

5. El recurso de reposición regulado en este artículo se entenderá desestimado si no recae resolución expresa en el plazo de un mes, quedando expedita la vía contencioso-administrativa.

6. Contra las resoluciones sancionadoras dictadas por los órganos competentes de las comunidades autónomas que hayan recibido el traspaso de funciones y servicios en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, así como por los Alcaldes, en el caso de las entidades locales, se estará a lo establecido en los anteriores apartados respetando la competencia sancionadora prevista en su normativa específica.

OTROS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN.

Con el fin de dar una visión más amplia de las diversas posibilidades de revisión de los actos de la Administración, se incluye en este apartado un breve comentario al recurso extraordinario de revisión y a la revisión de oficio de la Ley 39/2015, así como a los supuestos de revocación de actos y rectificación de errores, junto con un sucinto comentario de las particularidades de los recursos en vía económico-administrativa contra los actos de gestión recaudatoria.

Recurso extraordinario de revisión.

Se podrá interponer contra actos firmes en vía administrativa, ante el órgano administrativo que los dictó, quien también será competente para su resolución, en los siguientes casos:

1º) Que al dictarlas se hubiera incurrido en error de hecho, que resulte de los propios documentos incorporados al expediente (plazo de interposición cuatro años). Puede suceder esto cuando se detectan en el expediente inexistencia de pruebas determinantes o errores de datos fundamentales o que se aprecien ratificaciones incorrectas, etc.

2º) Que aparezcan documentos de valor esencial para la resolución del asunto que, aunque sean posteriores, evidencien el error de la resolución recurrida. (Plazo de interposición de tres meses).

3º) Que en la resolución hayan influido esencialmente documentos o testimonios declarados falsos por sentencia judicial firme, anterior o posterior a aquella resolución. (Plazo de interposición tres meses).

4º) Que la resolución se hubiese dictado como consecuencia de prevaricación, cohecho, violencia, maquinación fraudulenta u otra conducta punible y se haya declarado así en virtud de sentencia judicial firme. (Plazo de interposición tres meses).

Cuando el recurso no se funde en una de estas causas, el órgano competente para la resolución podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite. También podrá inadmitirse en el supuesto de que se hubiesen desestimado en cuanto al fondo otros recursos sustancialmente iguales.

Transcurridos tres meses desde la interposición del recurso sin que se notifique su resolución, se entenderá desestimado y quedará expedita la vía contencioso-administrativa.

El competente para resolver los recursos extraordinarios de revisión es el Jefe Provincial de Tráfico que dictó la resolución sancionadora y, en su caso, resolvió el recurso potestativo de reposición. Los recursos extraordinarios de revisión de expedientes resueltos por el Director del Centro de Tratamiento de Denuncias

Automatizadas (Centro ESTRADA), por delegación del Jefe Provincial, son igualmente competencia del Jefe Provincial que otorgó la delegación.

Revisión de oficio

La denominada comúnmente acción de nulidad procede tanto por propia iniciativa de la Administración como a solicitud del interesado cuando se dé alguna de las causas de nulidad señaladas en la ley 39/2015.

Cuando se trate de solicitudes formuladas por el interesado, el órgano competente para la revisión podrá acordar motivadamente la inadmisión a trámite cuando la misma no se base en alguna causa de nulidad o carezca manifiestamente de fundamento, así como en el supuesto de que se hubieran desestimado en cuanto al fondo otras solicitudes sustancialmente iguales.

Los expedientes de revisión de oficio, hayan sido o no objeto de recurso, deben ser remitidos a los Servicios Centrales para su resolución por el/la Director/a General por competencia propia.

Revocación de actos y rectificación de errores.

Por último (y aunque no se trate de un recurso), hay que citar la posibilidad que establece la Ley 39/2015 al disponer que:

"1. Las Administraciones Públicas podrán revocar en cualquier momento sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico.

2. Las Administraciones Públicas podrán, asimismo, rectificar en cualquier momento, de oficio o a instancia de los interesados, los errores materiales, de hecho o aritméticos existentes en sus actos."

Cuadro general de competencia para resolver en materia de recursos.

- A resoluciones del Jefe Provincial (o Locales de Ceuta y Melilla)

- Los recursos potestativos de reposición contra las resoluciones de los Jefes Provinciales (o Locales de Ceuta y Melilla) corresponden al propio Jefe Provincial o Local de Ceuta y Melilla, por ser el autor del acto recurrido.
- En cuanto a los recursos extraordinarios de revisión, deben ser igualmente resueltos por del Jefe Provincial.
- Acciones de nulidad: En todo caso corresponde resolver al Director/a General de Tráfico por competencia propia.

- Revisiones de oficio: En todo caso corresponde resolver al Director/a General de Tráfico por competencia propia.

- A resoluciones del Director del Centro de Tratamiento de Denuncias Automatizadas (Centro ESTRADA):

Teniendo en cuenta que el Director del Centro actúa por delegación de los Jefes Provinciales (o Locales de Ceuta y Melilla), la situación es la siguiente:

- Los recursos potestativos de reposición contra las resoluciones del Director del Centro son resueltos por el Jefe Provincial, por ser el delegante.
- En cuanto a los recursos extraordinarios de revisión, su resolución corresponde al Jefe Provincial.
- Acciones de nulidad: En todo caso corresponde resolver al Director/a General de Tráfico por competencia propia.
- Revisiones de oficio: En todo caso corresponde resolver al Director/a General de Tráfico por competencia propia.

7. RECURSOS DE CONTENIDO ECONÓMICO ANTE LA AGENCIA ESTATAL DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y TRIBUNALES ECONÓMICOS ADMINISTRATIVOS.

La LSV dispone respecto de la ejecución de sanciones que “una vez firmes en vía administrativa, se podrá proceder a la ejecución de las sanciones conforme a lo previsto en esta Ley”.

Y el artículo 110 LSV, en relación con el cobro de multas, señala que:

1. Una vez firme la sanción, el interesado dispondrá de un plazo final de quince días naturales para el pago de la multa. Finalizado el plazo establecido sin que se haya pagado la multa, se iniciará el procedimiento de apremio.
2. Los órganos y procedimientos de la recaudación ejecutiva serán los establecidos en la normativa tributaria que le sea de aplicación, según las autoridades que las hayan impuesto.

Estas providencias de apremio dictadas y notificadas por los órganos de recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria pueden ser impugnadas mediante los recursos de reposición y/o las reclamaciones económico-administrativas ante los llamados Tribunales Económico-Administrativos.

El artículo 165 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria señala en qué casos procede la suspensión del procedimiento de apremio, y en su artículo 167.3 se señalan los posibles motivos de oposición.

La tramitación por la interposición de un recurso o una reclamación económico-administrativa se regula en el Reglamento de desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa, aprobado mediante Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo.

El recurso de reposición (de la gestión de apremio).

El recurso de reposición es de carácter potestativo y deberá interponerse, en su caso, con carácter previo a la reclamación económico-administrativa o acudir directamente a esta última. Es decir, no se pueden simultanear ambas opciones.

La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en el recurso, sin que en ningún caso se pueda empeorar la situación del recurrente. No podrá interponerse la reclamación económico-administrativa hasta que se resuelva el recurso de reposición si se hubiera interpuesto éste.

El recurso de reposición exige que con el escrito de interposición se formulen las alegaciones tanto de cuestiones de hecho como de derecho y se acompañen los documentos que sirvan de base a la pretensión que se ejercita (art. 23), no siendo preceptiva la intervención de abogado ni procurador. Su presentación puede ser por vía telemática.

Para la vista del expediente, deberá comparecer el recurrente ante el órgano administrativo entre el día siguiente al de la notificación del acto administrativo y la finalización del plazo para la interposición del recurso, ya que una vez presentado el recurso no podrá examinarse el expediente.

Como norma general, la interposición del recurso no suspende el acto impugnado, aunque la ejecución del acto impugnado quedará suspendido cuando se preste garantía suficiente, o sin prestarla cuando se aprecie error aritmético, material o de hecho o se trate de sanciones que hayan sido objeto de recurso de reposición.

El plazo de interposición del recurso es de un mes y otro mes para su resolución (que será siempre en forma escrita) y notificación; y el silencio, en su caso, tiene sentido negativo.

La reclamación económico-administrativa y los Tribunales Económico-administrativos.

A pesar de su denominación, los Tribunales Económico-administrativos son órganos administrativos, no jurisdiccionales, con la única tarea de conocer de las reclamaciones económico-administrativas sometidas a su consideración. Sus miembros son funcionarios de las distintas administraciones, actuando como secretario un Abogado del Estado.

Existen dos categorías de Tribunales Económico-administrativos. El Tribunal Económico-administrativo Central con sede en Madrid y los Tribunales Económico-administrativos Regionales en cada Comunidad Autónoma y los Locales de Ceuta y Melilla.

Son objeto de las reclamaciones económico-administrativas, entre otros, los actos de gestión recaudatoria en vía de apremio dictados por los órganos de la Administración del Estado respecto de las multas impuestas en aplicación de la LSV.

Las reclamaciones por sanciones en materia de tráfico, al no superar el límite de 150.000€, sólo pueden ser objeto de reclamación en primera y única instancia ante los Tribunales Económico-administrativos Regionales o Locales, estando prevista la existencia de órganos unipersonales que mediante procedimiento abreviado conozcan de la reclamación en determinadas circunstancias, entre otras cuando la cuantía sea inferior a 6000 €, es decir, la inmensa mayoría de sanciones de tráfico.

Los Tribunales no podrán abstenerse de resolver y deberán dictar resolución expresa estimatoria o desestimatoria, o declarando la inadmisión de la reclamación, sin que en ningún caso pueda empeorar la situación inicial del reclamante. Las resoluciones de los Tribunales pueden ser, a su vez, objeto de diversos recursos (de escaso interés en relación con las reclamaciones en materia de sanciones de tráfico).

La actuación de la jurisdicción económico-administrativa ha dado lugar a discrepancias por razón de competencias con la actuación de las Jefaturas Provinciales de Tráfico, pudiendo concluirse que la competencia del Tribunal se limita exclusivamente a la revisión del acto recaudatorio impugnado, sin que por el contrario le incumba pronunciamiento alguno en orden a la procedencia o no de la sanción impuesta por la Jefatura de Tráfico

Siguiendo el Escrito Directriz SGON 01/09 de 21 de julio de 2009, cuando la sanción económica no ha sido abonada voluntariamente en los plazos establecidos, el expediente pasa a la vía ejecutiva para su cobro por el procedimiento de apremio, siendo impugnables estos actos de gestión recaudatoria mediante el denominado recurso económico-administrativo ante los Tribunales Económico-Administrativos Regionales (TEAR).

Si la sanción es exclusivamente de multa, la resolución de los TEAR no plantea mayor problema, pero con la aparición del permiso por puntos se plantea la pretensión de que, ganada la reclamación ante el TEAR, se dejara igualmente sin efecto la detracción de puntos.

En estos supuestos debe tenerse en cuenta lo siguiente:

-El objeto de la reclamación ante el TEAR es distinto del recurso de tráfico. En consecuencia, no es posible otorgar los mismos efectos a ambas reclamaciones, de forma que la estimación de la reclamación por el TEAR no compromete la resolución adoptada en el ámbito de tráfico.

-La actuación de la Jefatura en los casos de estimación de reclamaciones por parte de los TEAR será la siguiente:

1º. Anotarán en la aplicación informática la resolución adoptada y dejarán sin efecto la multa.

2º. Examinarán si, a la vista de la fundamentación de la resolución, **y de acuerdo con los criterios de la Dirección General de Tráfico**, procede cualquiera de las siguientes alternativas:

- a) Mantener la resolución dictada en su día, lo cual significa que la *suspensión del permiso de conducción* (hoy desaparecida) y/o la detracción de puntos se ejecuta en todos sus términos.
- b) Instar la revocación de la resolución en su día dictada por los órganos de la Dirección General de Tráfico en base a la ley 39/2015. Esta revocación debe ser realizada en todos los casos por el/la Director/a General de Tráfico – haya habido o no recurso de *alzada* (hoy reposición) -, por lo cual se deberá remitir para su firma a la Subdirección general adjunta de Recursos.

8. RECURSOS ANTE LA JURISDICCIÓN CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA.

A pesar de que los recursos administrativos permiten que la Administración revise sus propias decisiones, se hace necesario someter su actuación al control judicial de manera que se produzca, también en el ámbito administrativo, una tutela judicial efectiva como señala el artículo 24.1 de nuestra Norma Fundamental.

Dicho control se realiza mediante los denominados recursos contencioso-administrativos. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa se encuentra regulada en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA).

Su ámbito competencial de conocimiento es muy amplio, pero aquí debemos ceñirnos al control de las sanciones y sus posteriores recursos en materia de tráfico.

El Orden Jurisdiccional se halla integrado por los siguientes órganos:

- 1) Juzgados de lo Contencioso-Administrativo en cada provincia.
- 2) Salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia (en cada CC. AA).
- 3) Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, de ámbito nacional.
- 4) Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (ámbito nacional).

5) Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (ámbito nacional).

6) Sala de Revisión del Tribunal Supremo.

Sin embargo, en relación con el tema que nos ocupa (las sanciones de tráfico y las resoluciones de los recursos potestativos de reposición contra ellas, realizadas por los Jefes Provinciales de Tráfico; la cuantía de las mismas y la competencia territorial), sólo nos interesan los dos primeros.

El recurso contencioso-administrativo podrá interponerse ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en cuya circunscripción tenga su domicilio el demandante o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a elección del propio recurrente.

Aunque en teoría algunas sanciones de tráfico pueden llegar a los 20.000€, la gran mayoría no supera los 500€, por lo que en todo caso se tramitarán por el procedimiento abreviado, por no superar el límite de los 30.000€ que fija del art. 78.1 para este tipo de recurso. Incluso cuando junto a la sanción económica exista otro tipo de sanción que haga la cuantía indeterminada, la valoración no suele superar la cifra citada, por lo que no es corriente que las sanciones de tráfico se tramiten por el procedimiento ordinario.

Las partes del proceso:

En materia de sanciones de tráfico, el demandante suele ser el particular sancionado, siendo preceptiva la asistencia de abogado y procurador y la parte demandada la Administración autora de la resolución impugnada, que es defendida por los Abogados del Estado directamente o por medio de colaboradores.

Pretensiones de las partes. (art. 31 y ss.)

El demandante podrá pretender la declaración de no ser conforme a Derecho la sanción impuesta y la consiguiente anulación y, en su caso, el reconocimiento de la situación jurídica individualizada que hubiera dado lugar a la sanción.

La acumulación. (art. 34 y ss.)

Tiene por finalidad reunir en un solo proceso las pretensiones que se deduzcan en relación con un mismo acto, disposición o actuación. Puede producirse de oficio o a instancia de parte, pero tiene poca trascendencia en recursos contra las sanciones de tráfico.

La cuantía del recurso. (art. 40 y ss.)

Como se ha indicado, su determinación es de gran importancia. La fija el órgano jurisdiccional una vez formulada la demanda y la contestación a la demanda. Cuando la sanción es exclusivamente de multa, su cuantificación no ofrece problema y será de cuantía determinada, pero cuando la multa lleve aparejada una suspensión de autorización o retirada de puntos dará lugar a una cuantía indeterminada. (Las sanciones más frecuentes son de hasta 500 €, pero en determinados supuestos pueden llegar hasta 20.000 €).

En cuanto a la suspensión, ha desaparecido la sanción de suspensión del permiso o licencia de conducción, pero se mantiene la posible suspensión de otras autorizaciones. Por su parte, el expediente de pérdida de vigencia del permiso o licencia por pérdida del saldo total de puntos no es objeto de estudio en este tema.

Téngase en cuenta que la cuantía es determinante para fijar la competencia y puede tener gran trascendencia en relación con los recursos posibles tras la sentencia.

Interposición del recurso y reclamación del expediente. (art. 45)

En función de la cuantía, el procedimiento contencioso puede ser ordinario o abreviado (art. 78).

- En **el procedimiento ordinario** la tramitación es la siguiente:

El recurso comienza normalmente con la interposición de la demanda, escrito muy sencillo encabezado normalmente por el procurador, que se limita a identificar el acto o resolución sancionadora recurrida y la petición de que se tenga por interpuesta la reclamación y acompañado de los documentos que procedan (poderes, resolución sancionadora, etc.)

No hay que confundir la interposición de la demanda con la demanda propiamente dicha, que es posterior. Como se verá posteriormente, en el procedimiento abreviado el recurso se iniciará directamente por la demanda.

La interposición del recurso no suspende, en principio, la eficacia del acto impugnado, pero en el propio escrito de interposición se puede solicitar la adopción de medidas cautelares, cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder la finalidad del recurso.

Cuando el administrado pide la suspensión de la ejecución de la sanción impugnada, en general no procede acceder a la suspensión del pago de la multa; en cuanto a la pérdida de puntos, tampoco se suele acceder a la suspensión, salvo que se trate de puntos que supondrían la pérdida de vigencia del permiso, en cuyo caso podría causarse un daño de difícil reparación, al igual que en los supuestos de suspensión de las autorizaciones para ejercer personas y centros.

Plazo de interposición del recurso. (art.46)

El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses contados desde el día siguiente al de notificación de la sanción o de la notificación de la resolución del recurso de reposición si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquél que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto (el procedimiento sancionador de tráfico tiene numerosas previsiones de resoluciones presuntas).

Admitida la interposición de la demanda, el órgano jurisdiccional requerirá a la Jefatura de Tráfico que le remita el expediente administrativo.

(NOTA: En la actualidad todos los documentos de los expedientes sancionadores se encuentran digitalizados, por lo que se realizan gestiones para que dichos expedientes puedan ser remitidos por medios informáticos o incluso puedan ser obtenidos desde el propio órgano jurisdiccional).

El emplazamiento de la Administración se entenderá efectuado por la reclamación del expediente y se entenderá personada por el envío del expediente.

La demanda. (art. 52)

Una vez recibido el expediente administrativo en el Juzgado o Tribunal, se acordará que se entregue al recurrente para que se deduzca la demanda en el plazo de 20 días. El escrito es claramente antiformalista, semejante a un recurso administrativo, conteniendo los hechos y fundamento de derecho y en el se puede pedir que se reciba el pleito a prueba o se falle sin prueba y también se puede pedir la celebración de vista pública. Es importante que exista congruencia de la petición entre la demanda, la interposición y, en su caso el recurso, para evitar incurrir en desviación procesal.

La contestación a la demanda. (art. 54 y ss.)

Presentada la demanda, se dará traslado de la misma a la parte demandada para su contestación en el plazo de 20 días.

Prueba. (art. 60 y 61)

Solamente se podrá pedir el recibimiento del proceso a prueba en los escritos de demanda y contestación a la demanda, que se desarrollará con las normas generales establecidas para el proceso civil.

Vista y conclusiones. (art. 62 y ss.)

La vista o el escrito de conclusiones son los últimos actos del proceso antes de la sentencia.

Salvo que la Ley disponga otra cosa, las partes podrán solicitar que se celebre vista, que se presenten conclusiones o que el pleito sea declarado concluso, sin más trámites, para sentencia.

Si se celebra vista, se dará la palabra a las partes para que de forma sucinta expongan sus alegaciones, pero lo normal es que no haya vista, sino escrito de conclusiones en el que las partes presentarán unas alegaciones sucintas acerca de los hechos, la prueba practicada y los fundamentos jurídicos con que apoyen sus pretensiones, quedando el pleito concluso para sentencia.

En el acto de la vista o en el escrito de conclusiones no podrán plantearse cuestiones que no hayan sido suscitadas en los escritos de demanda y contestación.

Procedimiento abreviado. (art. 78)

El procedimiento abreviado se inicia por demanda acompañada por los documentos en que el actor funde su derecho. Una vez presentada, si el Secretario Judicial admite la demanda, acordará su traslado al demandado, cita a las partes para la celebración de la vista y ordena a la Administración que aporte el expediente con al menos 15 días de antelación del término señalado para la vista.

El Juez dictará sentencia en el plazo de 10 días desde la celebración de la vista.

La sentencia. (art. 67 y ss.)

En la sentencia se deciden todas las cuestiones planteadas, pero sólo las cuestiones planteadas (principio de congruencia). Y puede consistir en la inadmisibilidad, la estimación o la desestimación del recurso.

Aunque la sentencia es el modo normal de finalización del procedimiento contencioso-administrativo, hay que tener en cuenta también los otros modos de terminación: desistimiento del recurrente, allanamiento del demandado y satisfacción extraprocesal.

La estimación del recurso supone aceptar las pretensiones del recurrente y darle la razón. La sentencia eventualmente puede ser total o parcialmente estimatoria.

La sentencia contendrá además el pronunciamiento que corresponda respecto de las costas.

Las sentencias de los Juzgados de los Contencioso-Administrativo serán susceptibles de recurso de apelación, *salvo que se hubieran dictado sobre asuntos siguientes cuya cuantía no exceda de 30.000 euros* según detalla el artículo 81.1 a); aunque el artículo 81.2 manifiesta que serán siempre susceptibles de apelación las

sentencias siguientes: a) *Las que declaren la inadmisibilidad del recurso en el caso de la letra a) del apartado anterior.*

El recurso de apelación se interpondrá ante el Juzgado que hubiere dictado la sentencia que se apele, quien elevará los autos, el expediente administrativo y los escritos presentados ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia (en cada CC. AA.).

La ejecución de sentencias.

La ejecución de sentencias forma parte del contenido esencial del derecho a la tutela judicial efectiva y la potestad de hacer ejecutar lo juzgado corresponde en exclusiva a los Juzgados y Tribunales.

Devolución de la multa por ejecución de sentencias.

Las instrucciones de la DGT para estos supuestos son las siguientes:

Recibido en una Jefatura Provincial un fallo judicial estimatorio de la pretensión aducida por el recurrente, consistente por tanto en la devolución de la multa administrativa, con o sin imposición de costas a la Administración, y sin esperar a que los interesados lo reclamen, deberán requerirles para que, a efectos de ejecutar la sentencia dictada en el procedimiento judicial de que se trate, faciliten sus datos bancarios, con el fin de transferirles el importe de la sanción y las costas, en su caso, tramitando a continuación, con aportación de copia auténtica o fotocopia compulsada de la sentencia y los citados datos bancarios, el correspondiente expediente de devolución ante los Servicios Centrales de la DGT (Instrucción 01/S-53).

NOTA: La publicación de la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, que regula determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (texto consolidado) ha tenido una importante incidencia en la presentación de recursos contencioso-administrativos. El artículo 2 de dicho texto legal enumera los actos procesales cuyo ejercicio constituye el hecho imponible de la tasa por el ejercicio de la potestad jurisdiccional y en su apartado c) se refiere a la interposición del recurso contencioso-administrativo. Por su parte, el artículo 4.1 recoge como exención de la tasa en su apartado d) la interposición de recursos contencioso-administrativos cuando se recurra en casos de silencio administrativo negativo o inactividad de la Administración.

Por tanto, desde el 22 de noviembre de 2012, la presentación de un recurso contencioso-administrativo frente a una resolución sancionadora por infracciones de tráfico exige el previo pago de una tasa, salvo en los casos de silencio administrativo negativo o inactividad administrativa, en los que los ciudadanos están exentos de dicho pago.